

## **Las cartas boca arriba: Reflexiones sobre 25 años del movimiento pro derechos humanos**

Por Reed Brody

El movimiento pro derechos humanos ha recorrido un largo camino desde la fundación de Human Rights Watch hace 25 años. En casi todos los rincones del planeta, los activistas ondean la bandera de los derechos humanos para defender sus demandas de respeto y dignidad. Gracias a este movimiento, a finales del siglo pasado los derechos humanos se habían convertido en el centro de una de las ideologías dominantes en el mundo, proclamada incasablemente por los gobiernos. Aunque el movimiento no pudo detener el genocidio en Irak, Ruanda y Yugoslavia, y los asesinatos masivos en otras partes del mundo, estaba empezando a imponer un elemento moral en las relaciones internacionales con una fuerza sin precedentes en la historia moderna. El movimiento fue un factor de transformaciones políticas en el Este de Europa, América Latina y algunas partes de África y Asia.

Sin embargo, el movimiento pro derechos humanos se enfrenta ahora a serios retos. En particular, los horribles atentados del 11 de septiembre de 2001, contra el corazón de la potencia estadounidense, han desencadenado una reacción que amenaza con eliminar muchos de los logros con la excusa de una interminable “guerra contra el terrorismo”. Mientras se va desarrollando esta campaña, los gobiernos que la protagonizan vuelven a relegar los derechos humanos a un segundo plano, al igual que antes y durante la Guerra Fría, mientras otros aprovechan la oportunidad de la guerra contra el terrorismo para justificar la represión interna. Frente a estos desafíos, el movimiento tiene que demostrar que la promoción de los derechos fundamentales es un elemento esencial para la seguridad y un instrumento indispensable para combatir el terrorismo.

\*\*\*

“Tras años de verse ignorados o desdeñados por su excentricidad, los activistas pro derechos humanos se han subido a la ola de la popularidad gracias a la atención del Presidente Carter al tema de los derechos humanos. Dicen que la experiencia es a la vez estimulante y perturbadora. ‘Los derechos humanos se han puesto de repente de moda’, señala Roberta Cohen, directora ejecutiva de la Liga Internacional de Derechos Humanos. ‘Durante años nos han considerado sermoneadores, idealistas disparatados o entrometidos y ahora nos hemos vuelto respetables’”.

Así empezaba un artículo sobre el movimiento pro derechos humanos publicado en 1977 en el New York Times. Ese mismo año, Amnistía Internacional ganó el Premio Nóbel de la Paz por sus logros ya entonces considerables. Al año siguiente, se fundó Human Rights Watch. Hoy en día, los derechos humanos y el movimiento que los defiende forman una parte fundamental del panorama político.

En los últimos 25 años, una gran cantidad de nuevos grupos—nacionales e internacionales—han infundido vida a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a otras normas adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial. La bandera de los derechos humanos ha sido ondeada en todo el mundo—por los monjes tibetanos y los trabajadores de las plantaciones ecuatorianas, por los grupos de mujeres africanas y los activistas gay y lesbianas de Estados Unidos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el paladín oficial de la Declaración Universal. Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, han promulgado leyes que hacen del respeto a los derechos humanos un factor en sus relaciones bilaterales. La

mayoría de los países cuentan con comisiones nacionales de derechos humanos o defensores del pueblo. La educación sobre derechos humanos forma parte del currículo de estudios en más de 60 países. La mayoría de los países han ratificado la mayor parte de los tratados de derechos humanos. Una Corte Penal Internacional se está preparando para investigar algunas de las atrocidades más graves, mientras que el movimiento ya se ha apuntado casos de brutalidad tan emblemáticos como el de Augusto Pinochet y Slobodan Milosevic.

El propio movimiento pro derechos humanos se ha vuelto más inclusivo y forma un considerable mosaico de grandes OING (organizaciones internacionales no gubernamentales) profesionales y miles de organizaciones regionales, nacionales y locales que se ocupan de temas que abarcan desde la autodeterminación y los derechos del niño, desde el acceso a los medicamentos para el VIH hasta el derecho al agua.

Con la expansión del movimiento, los temas que antes de habían dejado de lado, particularmente los relacionados con los derechos económicos y sociales, se han sumado a la campaña general. De hecho, ha ido creciendo la convergencia en el trabajo de los grupos dedicados a promover el desarrollo socioeconómico por un lado, y los que protegen los derechos humanos por otro. Muchas organizaciones de desarrollo están pasando de un trabajo basado en las necesidades, el bienestar y la ayuda humanitaria a una estrategia de desarrollo basada en los derechos humanos. Los grupos de derechos humanos se concentraban sobre todo en problemas civiles y políticos como los presos políticos y la tortura. Pero ahora están abordando cada vez más las causas socioeconómicas fundamentales de estas violaciones y defendiendo derechos económicos y sociales, tales como el derecho a la educación, la salud y la vivienda.

Los derechos de la mujer, que antes se habían dejado al margen, se han convertido en una fuerza impulsora del movimiento pro derechos humanos desde que las mujeres tomaron por asalto la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, y obtuvieron el pleno reconocimiento de que “los derechos de la mujer son derechos humanos”. Entre otras cosas, el enfoque en los derechos de la mujer ha contribuido a ampliar los conceptos fundamentales de “violación” y “violador”, y ha llevado al movimiento a desmarcarse de la atención exclusiva a la acciones del Estado y examinar la culpabilidad de la inacción oficial en los abusos conocidos cometidos por actores privados.

Los diferentes niveles del movimiento se complementan entre sí. Están los que podríamos llamar organizaciones primarias o movimientos de personas que luchan por defender los derechos de sus propios miembros, tales como los grupos pro derechos civiles de Estados Unidos, muchas organizaciones de mujeres, el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil y otros grupos similares. Están los grupos que intentan promover los derechos humanos sentando las bases de una sociedad respetuosa de los mismos—libertad de prensa, independencia judicial, educación sobre derechos humanos y tolerancia y control civil de las fuerzas armadas. Y existen grupos nacionales e internacionales, como la Comisión Colombiana de Juristas o Human Rights Watch, que velan por el respeto a las normas de derechos humanos y movilizan la presión para prevenir o acabar con el abuso.

Las campañas y el trabajo de lobby del movimiento también se han vuelto cada vez más sofisticados. Desde las primeras campañas de cartas inventadas por Amnistía Internacional, el movimiento ha evolucionado e incluye a responsables de campañas, organizadores, *lobbistas* y expertos en los medios de comunicación. Las principales OING cuentan ahora con investigadores sobre el terreno conectados por e-mail con las oficinas de campañas en las Naciones Unidas y en las principales capitales, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para afectar las decisiones cuando se están tomando. Algunos grupos de vigilancia, como Human Rights Watch, se ocupan de presionar a gobiernos poderosos—como Estados Unidos o la Unión Europea—tratándolos a veces como aliados en las presiones por el cambio, a veces como vicarios de sus socios abusivos y más insensibles a las críticas democráticas, (y, por supuesto, a veces como responsables ellos mismos de los abusos). Somos conscientes por supuesto de la

destacada advertencia de Ian Martin: “El movimiento pro derechos humanos no puede conformarse con trabajar dentro de las relaciones de poder existentes en un mundo desigual, tampoco puede ser siquiera mostrarse neutral en su actitud frente a ellas”. Sin embargo, la aplicación del método de “nombrar y avergonzar” no sólo a los gobiernos abusivos, sino también a sus aliados internacionales, con el fin de respaldar a nuestros aliados en los países afectados, ha convertido al movimiento en una fuerza mucho más poderosa con la que hay que contar.

## Después de la Guerra Fría

Durante años después de la fundación de Human Rights Watch, la Guerra Fría supuso un incentivo para los gobiernos que utilizaron los derechos humanos como un arma arrojadiza y un obstáculo para aquellos que intentaron establecer una cooperación internacional basada en los principios para mejorar la situación de los derechos humanos. Estados Unidos se aprestó a esgrimir la causa de los derechos humanos en su batalla ideológica contra la Unión Soviética y sus aliados, incluso mientras encubría los abusos (cuando no los promovió directamente) de los regímenes autoritarios a los que ayudaba y actuaban ostensiblemente como baluartes contra el comunismo. El bloque del este, por su parte, rechazó las críticas contra su trayectoria en materia de derechos humanos por ser una intolerable “injerencia en los asuntos internos” de países soberanos y paralizó la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Incluso durante la Guerra Fría, sin embargo, las movilizaciones pro derechos humanos contribuyeron a muchos logros importantes, y tuvieron un papel considerable en el final del apartheid en Sudáfrica y la iniciativa en defensa de gobiernos democráticos en gran parte de América Latina. El proceso de Helsinki—que provocó la creación de Helsinki Watch, el precursor de Human Rights Watch—sentó las bases para que las personas tanto de dentro como de fuera del bloque soviético pudieran cuestionar a los gobiernos represivos, lo que llevó en última instancia al colapso del sistema soviético que negaba en la práctica el disfrute de los derechos humanos fundamentales.

El final de la Guerra Fría conllevó aparentemente un nuevo consenso entorno al ideal de los derechos humanos. Los disidentes del bloque soviético, que habían creado el movimiento pro derechos humanos en la zona y por los que había hecho campaña el movimiento internacional, no sólo quedaron libres sino que en ciertos casos arrasaron haciéndose con el poder. Un movimiento por la democracia multipartidista se afianzó en África. América Latina completó su proceso de transformación desde la era de las dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos. En algunos países asiáticos como Filipinas y Corea del Sur, los movimientos pro derechos humanos también contribuyeron a facilitar el cambio democrático. Una nueva mayoría democrática—que incluía ahora a muchos países del Este de Europa y América Latina—liberó el potencial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que, a principios de los noventa, desató finalmente las posibilidades de las Naciones Unidas para hacer de los derechos humanos una cuestión a tomar en serio y, en ciertos casos, adoptar incluso un papel cercano al del activista que Eleanor Roosevelt podría haber concebido.

Lo que es más importante, el principio de soberanía nacional fue cediendo terreno ante la presión de los derechos humanos. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en Viena, dejó definitivamente de lado la defensa basada en la soberanía al proclamar que la “promoción y la protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional”. De hecho, la manera en que un estado trataba a sus ciudadanos era asunto de todos. Frente a las críticas de los defensores del relativismo cultural y los “valores asiáticos”, la conferencia de Viena también declaró enfáticamente que “el carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas”.

Los derechos humanos se convirtieron, en palabras de Michael Ignatieff, el “vocabulario moral dominante en las relaciones exteriores”, a pesar de que, en la práctica, se vieron frecuentemente

superados por inconsistentes objetivos económicos y de seguridad. Con el ascenso de la retórica sobre los derechos humanos, y la aparición instantánea en televisión e Internet de noticias sobre abusos, la libertad de los gobiernos para actuar en el interés aparente de las élites dominantes se vio, quizás más que en ningún otro momento de la historia reciente, limitada por una sociedad civil informada y activa. Richard Falk reconoció correctamente que “durante la década de los noventa, el movimiento para alcanzar un consenso en materia de derechos humanos estaba iniciando una revolución normativa de las relaciones internacionales que estaba empezando a superar los cálculos realistas de poder e importancia dentro de la imaginación política de observadores y diseñadores de políticas”.

Sin, incluso de esta década supuestamente dorada de los noventa, el movimiento pro derechos humanos no pudo detener los genocidios en la antigua Yugoslavia y Ruanda, los crímenes contra la humanidad en Timor Leste y Chechenia, ni el asesinato de millones de civiles en los conflictos armados de África Central. (De hecho, mientras estábamos reunidos en Viena para celebrar el triunfo de los derechos humanos, la matanza en Bosnia continuaba su curso a tan sólo unos cientos de kilómetros de distancia). La mitad de los 6.000 millones de habitantes de nuestro planeta siguen viviendo en condiciones de pobreza, el 24 por ciento en la “pobreza absoluta”. Entre la población objeto de atención del movimiento pro derechos humanos, 2.000 millones no tienen acceso a la atención sanitaria y 1.500 millones no disponen de agua potable.

En un mundo en el que la intolerancia y el extremismo están en boga, en el que millones de personas mueren en los conflictos armados, en el que la pobreza y la miseria son rampantes, algunos se ven tentados a preguntar, como David Rieff, ¿si la mejora de las normas ha servido de algo “para las personas necesitadas de justicia, o ayuda, o clemencia, o pan?”

Sin embargo, no debe confundirse la tristeza sobre el curso actual de los acontecimientos con el escepticismo sobre el valor de la empresa de los derechos humanos o los logros del movimiento. Es cierto que las normas no detendrán por sí solas a un tirano o una facción extremista empeñados en el genocidio, y es en ese punto en el que el movimiento pro derechos humanos, como muchos otros, debe enfrentarse a la difícil cuestión de aceptar la intervención militar para detener las atrocidades. (Creo que la mayoría de mis colegas coincidirán en que el recurso a la fuerza no es sólo legítimo sino también imperativo frente al genocidio o una atrocidad equivalente. No obstante, sigue existiendo un profundo desacuerdo sobre cómo debe autorizarse o emplearse la fuerza.) Pero aunque puede que los dictadores no se circunscriban a las normas, las democracias abiertas lo están, siempre que estén respaldadas por una sociedad civil participativa. Entre el carácter relativamente quirúrgico de los bombardeos en Irak y Serbia y el arrasamiento con bombas de Laos o Camboya, sin mencionar la destrucción de Hiroshima o Dresden, obra más que una evolución en la bondad de los generales. Asimismo, es más difícil encarcelar ahora a alguien como Nelson Mandela durante 25 años o Chia Thye Poh de Singapur durante 23 años. Lo que era una práctica habitual hace 50 o 25 años es simplemente inaceptable hoy en día.

Las normas otorgar poder a los activistas y a las víctimas, al crear puntos de referencia, dar legitimidad a sus demandas y establecer, en palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. De hecho, en toda una serie de áreas, que abarcan desde los derechos de la mujer hasta la tendencia en contra de la pena de muerte, el proceso de desarrollo de normas y la movilización para su aplicación ha arrojado resultados concretos.

Mientras participaba en las sesiones sobre el caso Pinochet ante la Cámara de los Lores británica en 1998, me sorprendió hasta qué punto ha madurado el movimiento pro derechos humanos. No sólo se estaban aplicando finalmente en un caso concreto nobles proclamaciones como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, se estaban aplicando en el caso de un hombre cuya mueca de desprecio tras unas oscuras gafas de sol había llegado a simbolizar una dictadura despiadada, y cuyas tácticas represivas habían despertado, 25 años antes, las

mismas fuerzas—el activismo pro derechos humanos y las convenciones internacionales—que llevarían a su detención y estas sesiones. Pinochet envió al exilio a cientos de miles de chilenos capaces de expresar su opinión. Ellos, junto con una indignada opinión pública mundial, engrosaron las filas de grupos como Amnistía Internacional, que a su vez presionó para la adopción de la Convención contra la Tortura que permitiría el arresto del ex dictador.

## El 11 de Septiembre

En su momento de mayor fortaleza, sin embargo, el movimiento pro derechos humanos se encontró con un nuevo desafío que amenazó, y sigue amenazando, con deshacer mucho de lo que había logrado. A través de la ventana de nuestra sala de reuniones en la mañana del 11 de septiembre, el personal de Human Rights Watch vio como dos aviones secuestrados destruían el World Trade Center. Estos crímenes contra la humanidad, cuyo objetivo era el centro del poder estadounidense, han desencadenado una reacción que amenaza con eliminar muchos logros bajo la guisa de una interminable “guerra global contra el terror”. La campaña contra el terrorismo se ha caracterizado por la erosión del imperio de la ley más que por su aplicación. Los derechos humanos se han visto debilitados en el preciso momento en que es más necesario defenderlos y respetarlos.

En todo el mundo, muchos países intentaron aprovecharse cínicamente de la guerra contra el terrorismo para intensificar sus propias campañas contra opositores políticos, separatistas y grupos religiosos, o para sugerir que deberían quedar inmunes a las críticas contra sus prácticas en materia de derechos humanos. Muchos países han respondido a la indiscriminada violencia terrorista con nuevas leyes y medidas que no diferencian a su vez entre culpables e inocentes. Numerosos países han promulgado leyes antiterroristas regresivas que amplían la autoridad del gobierno para detener y vigilar hasta poner en peligro los derechos fundamentales. Se ha producido una avalancha continuada de arrestos y detenciones de sospechosos sin garantías procesales. En algunos lugares, aquellos considerados terroristas han sido asesinados o ejecutados extrajudicialmente.

Uno de los acontecimientos más preocupantes ha sido el renovado debate sobre la legitimidad de la tortura. A pesar de que la tortura ha continuado siendo un fenómeno generalizado en todo el mundo, hasta hace poco era casi un axioma que ningún país admitiera tolerar la tortura. La tortura es la última forma de degradación, el incalificable acto medieval que habíamos desterrado como una práctica inaceptable. La tortura fue una de las primeras batallas de Amnistía Internacional y, gracias a la campaña, la tortura se ha considerado una barbaridad emblemática que ya no podía permitirse en ninguna circunstancia. El torturador, señalaba un tribunal de Estados Unidos en el caso Filártiga, ha suplantado al pirata de antaño como “un enemigo de toda la humanidad”. Fue la tortura, no los asesinatos en masa, lo que le arrebató la inmunidad a Pinochet. Sin embargo, ahora escuchamos, especialmente en Estados Unidos, a personalidades destacadas sugiriendo que la tortura puede ser un instrumento apropiado en la lucha contra el terrorismo. De hecho, se han vertido graves acusaciones de que los detenidos capturados en Afganistán han sido golpeados y sometidos a las técnicas conocidas como de “estrés y presión” por parte de oficiales estadounidense, o entregados a autoridades de terceros países donde es probable que los torturen, acusaciones a las que el gobierno de Bush no ha respondido directamente.

A nivel intergubernamental, la preocupación por los derechos humanos ha quedado relegada a un segundo plano frente a la prioridad de ganar nuevos aliados en la guerra contra el terrorismo, dando efectivamente libre entrada a nuevos socios y aliados estratégicos más establecidos. En las sesiones de este año de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, ningún país estaba dispuesto a debatir una resolución crítica contra China, mientras Rusia repelió fácilmente una resolución sobre Chechenia, a pesar de las atrocidades continuas en la zona.

Estos acontecimientos hicieron que Michael Ignatieff se preguntara si, después del 11 de Septiembre, “la era de los derechos humanos había pasado”.

No cabe duda de que el movimiento pro derechos humanos se enfrenta a un nuevo reto. La suerte está echada. No debemos aferrarnos a la ilusión de que, sin el apoyo de una ciudadanía organizada, Estados Unidos (o cualquier otro país poderoso) hará de los derechos humanos el “alma de su política exterior”, usando las palabras del Presidente Jimmy Carter.

En esta nueva era, el movimiento tiene que demostrar que la promoción internacional de los derechos humanos no es sólo un valor ético, sino también un instrumento esencial en la guerra contra el terrorismo. Kofi Annan marcó el camino en su discurso de septiembre de 2003 ante la Asamblea General: “Ahora vemos con escalofriante claridad que un mundo en el que muchos millones de personas padecen una opresión brutal y una miseria extrema nunca será plenamente seguro, ni siquiera para sus habitantes más privilegiados”. Aunque es probable que los cambios de política no apacigüen a los propios terroristas, tenemos que partir de la evidencia de que el apoyo al terrorismo se alimenta de la represión, la injusticia, la desigualdad y la falta de oportunidades. Como ha señalado Richard Falk: “Es probable que el mensaje del extremismo no llegue a tener una resonancia tan amplia y amenazadora si las quejas que lo animan no estén tan ampliamente compartidas en la comunidad afectada”. Donde hay democracia e igualdad, donde hay esperanza, donde existen vías pacíficas para el cambio, el terrorismo tiene muchas menos posibilidades de ganarse el apoyo popular. La seguridad global mejora, por lo tanto, con el éxito de las sociedades abiertas que fomentan el respeto por el imperio de la ley, promueven la tolerancia y garantizan los derechos del pueblo a la libertad de expresión y la disidencia pacífica.

En Estados Unidos, donde es natural que se sienta más la onda expansiva del 11 de Septiembre, los temores resultantes han sido explotados por el gobierno de Bush para presionar por una restricción radical de los derechos constitucionales. El movimiento pro derechos humanos está esforzándose por persuadir a los estadounidenses de que, aunque el gobierno debe tener poder para adoptar aquellas medidas que sean razonables y necesarias para reducir la amenaza muy real del terrorismo, los requisitos de seguridad pueden y tienen que reconciliarse con los beneficios de la libertad. En uno de las advertencias más escalofriantes pronunciada por un declarado defensor de la constitución, el Fiscal General de Estados Unidos, John Ashcroft, dijo ante el Congreso que “para aquellos que atemorizan a las personas amantes de la paz con fantasmas de libertad perdida, mi mensaje es el siguiente: Sus tácticas sólo ayudan a los terroristas, ya que erosionan nuestra seguridad nacional y disminuyen nuestra resolución. Suministran munición a los enemigos de América y hacen vacilar a los amigos de América”. Aunque se trata de una batalla contracorriente, el movimiento está respondiendo con las palabras de Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos: “aquellos que renunciarían a un libertad esencial a cambio de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”.

Estos tiempos difíciles exigen que el movimiento pro derechos humanos explote todas sus posibilidades para movilizar a personas y grupos. Esto implica completar la tarea inacabada de integrar todas sus partes y desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas entre grupos internacionales y nacionales de derechos humanos. Hemos recorrido un largo camino desde que un activista centroamericano se quejó de que el movimiento seguía el modelo de la maquila, en el que los grupos del norte explotaban la “materia prima” de los abusos y presionaban a los gobiernos ricos para que condicionaran la ayuda a los países pobres. Pero seguimos luchando por encontrar vías por las que los grupos en la vanguardia nacional y local puedan superar sus dificultades para acceder a la financiación, los medios de comunicación internacionales y la experiencia con el fin de mejorar su participación en la definición de un programa internacional de derechos humanos. No se trata de retórica políticamente correcta. Por ejemplo, como ha señalado Bahey El Din Hassan, director del Instituto de Estudios sobre Derechos Humanos de El Cairo, las ONG internacionales sólo podrán ayudar a contrarrestar la percepción de sus socios

árabes de que los derechos humanos son una imposición occidental otorgándoles poder para que contribuyan a definir el programa. El movimiento tiene que enfrentarse al hecho de que su debilidad es mayor precisamente donde el apoyo al terrorismo es más fuerte, en Oriente Medio y el Este de Asia.

Para poder alcanzar la plenitud de nuestra fuerza, tenemos que crear una sinergia entre el movimiento pro derechos humanos y los que hacen campaña por la justicia social y económica. Aunque nuestros programas no siempre encajen perfectamente, necesitamos juntar nuestras fuerzas en torno a los asuntos clave que nos unen. Muchos de nuestros notables éxitos como movimiento, tales como la creación de la Corte Penal Internacional y la lucha contra el apartheid, se produjeron cuando unimos fuerzas con una base más amplia. La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, por ejemplo, de la que Human Rights Watch es miembro fundador, engloba a una coalición masiva de 1.300 grupos dedicados a los derechos humanos, la ayuda humanitaria, los niños, la paz, los discapacitados, los veteranos, la medicina, la acción humanitaria contra las minas, el desarrollo, el control del armamento, el medioambiente, las mujeres y religiosos de más de 90 países. Al conceder el Premio Nóbel de la Paz a la Campaña y a su coordinadora principal, Jody Williams, el Comité del Nóbel citó la singularidad de una iniciativa que hizo "posible expresar y mediar en una amplia campaña de compromiso popular de una manera sin precedentes".

No tengo dudas de que una abrumadora mayoría de los habitantes de nuestro mundo apoyan el ideal de los derechos humanos. Nuestra tarea inacaba consiste en movilizar dicha mayoría para convertirla en una fuerza demasiado poderosa para poder resistirla.